

Agua y sostenibilidad.

Enrique Cabrera - Universidad Politécnica de Valencia

Atrás ya quedó la cumbre mundial sobre desarrollo sostenible de Johannesburgo que, pese a la imponente participación de líderes procedentes de todos los confines de la tierra, está por ver si sirve de algo. Sus antecedentes no invitan al optimismo. Diez años después del único precedente (Río, 1992) lo que aquella cumbre quiso arreglar (medio ambiente, ayuda al tercer mundo y pobreza) ha empeorado. Y como el fracaso no ha estado tanto en las resoluciones sino en su incumplimiento, esta vez los esfuerzos se han centrado en el establecimiento de controles que vigilen la ejecución de los acuerdos alcanzados. En otras palabras, menos dichos y más hechos.

Las recientes declaraciones del presidente de Cruz Verde Internacional, Gorbachov, resumen bien el poso de Río 92. «Durante y después de la cumbre sobre medio ambiente de Río, percibí un abrumador clima de esperanza y de futuro: Era un tiempo de optimismo y, en retrospectiva, de inocencia pues todo el mundo celebraba el final de la Guerra Fría. Diez años después nos vemos rodeados por un clima diferente, de cinismo y, para muchos de desesperación. Algo que difícilmente causa sorpresa si se tiene en cuenta que el medio ambiente sigue deteriorándose de manera alarmante». Tal vez a la segunda vaya la vencida aunque, con intereses tan contrapuestos, no resultará nada fácil

En el fondo subyace la permanente lucha del corto plazo, de limitada pero inmediata rentabilidad, frente al mediolargo plazo, mucho más beneficioso aunque de pago pospuesto en el tiempo. Lucha desigual por las urgencias de quienes toman decisiones, los políticos, siempre a merced del calendario electoral. En democracia, posiblemente sea su principal defecto, las apuestas de futuro tienen siempre las de perder hasta que la rutina se muestra incapaz de dar respuesta a los nuevos escenarios que el devenir del tiempo genera. Entonces cobra sentido la afirmación de Henry Kissinger «la solución está en la crisis».

Un ejemplo paradigmático de lo que ocurre en el contexto medioambiental internacional lo constituye nuestra política del agua, objeto de apasionado debate en toda esta legislatura. Busca una pronta rentabilidad dejando la apuesta de futuro para la retórica. Su principal exponente el Plan Hidrológico Nacional (PHN) sentencia «el PHN pone especial énfasis en garantizar un uso racional y sostenible de los recursos hidráulicos, preocupación que se trasluce a lo largo de todo su articulado», unos objetivos que los hechos, un amplio catálogo de obras hidráulicas, trasvase incluido, no confirman.

Y no los confirman porque el uso racional y sostenible del agua se apoya en dos pilares, política tarifaria basada en la recuperación integral de costes y agencias reguladoras que establezcan objetivos sostenibles y exijan su cumplimiento. El primero, obligatorio a partir de 2010 por mor de la nueva Directiva Marco del Agua de Bruselas, no necesita comentarios. El agua es un bien social. Pero conducirla hasta el grifo y devolverla depurada al medio receptor requiere grandes inversiones, a las que hay que añadir los costes medioambientales derivados de la detracción del recurso, costes ya contemplados por países avanzados. El ciudadano, con el agua casi gratis, es feliz pues ignora

que el regalo es la principal causa de la creciente contaminación.

La segunda medida, necesaria para adecuar a los nuevos tiempos una administración pensada desde la promoción de la obra y la distribución del recurso, es, aún si cabe, más impopular. No se quiere controlar ni ser controlado. Así lo evidencian los resultados de una de las raras tareas de control de esta administración, la vigilancia de vertidos. Los más de nuestros ríos dejan mucho que desear y el que más, el Segura, a los responsables de su policía, judicialmente imputados por su elevado nivel de contaminación, se les ha indigestado.

Otra rara tarea de control, la captación de las aguas subterráneas y el consiguiente registro de pozos impuesto por la ley de 1985, no ha corrido mejor suerte. El Libro Blanco reconoce 547.866 captaciones existentes, que habrán más, de las que sólo 161.953 son legales. Para registrarlas la Confederación del Guadalquivir recurrió a personal extranjero. Ningún español asumió la inquisitorial tarea. Pendiente está el control de dotaciones de riego, hoy asignadas a ojo (medir agua es tarea de fontanero, no de ingeniero, dicen los técnicos de esta administración), sancionar a quienes promueven roturaciones ilegales que nacen por doquier o promover, con una política de precios adecuada, la mejora de los rendimientos de nuestras redes de agua, hoy tercermundistas. Nada de ello se hace. Hay fobia a educar, ordenar y controlar.

Sé que para candidatos en busca de votos el mensaje «nosotros traeremos el agua del Ebro al Levante» es más rentable que educar al auditorio explicándole la necesidad de encarecer el agua y de controlar su uso. Lo sé. Pero también sé que la gestión sostenible pasa por esas medidas, unas medidas ni tan siquiera exploradas pese a los síntomas de agotamiento del modelo actual. Los trasvases propician guerras del agua entre autonomías, las obras hidráulicas están judicializadas, la crispación social va en aumento y en fin el escepticismo (sino el rechazo) de Europa a esta política es patente. Con todo, el corto plazo, los intereses creados y el miedo no exento de falta de imaginación a perturbar un complejo equilibrio, aconsejan aguantar el tipo.

O al menos así lo entienden quienes toman las decisiones. Pese a que lo juicioso sería iniciar una lenta transición apoyada en una campaña de sensibilización medioambiental, habrá que convenir que la solución está en la crisis, una crisis con nombres propios, sequía o contaminación. Y puestos a escoger me inclino por la contaminación. Una sequía, hasta ahora la excusa perfecta para promover más obra hidráulica, no cambiará el marco actual máxime visto que cinco años de cortes de agua en toda Andalucía para nada lo han modificado. Además la propia sequía es en sí misma justificante de la tribulación que genera. Nadie más, bendita ignorancia, es responsable.

La contaminación, como sucedió en la Alemania de los setenta, está pues llamada a ser el motor del cambio. No es en sí misma, como la sequía, coartada. Sin agencias reguladoras y sin política tarifaria el consumo de agua está disparado, y a más consumo mucha más contaminación. Hoy relativamente controlada (aún cuando hay playas y, como se ha dicho, ríos en estado penoso) por las grandes inversiones realizadas con unos fondos europeos que en el 2006 se acaban. Con la ampliación de la UE del 2004, habrá socios más necesitados. Un Estado presionado por crecientes gastos sociales y sin capacidad de endeudamiento, y unas depuradoras de vida corta (el plazo de amortización del equipamiento industrial es 10 años) obligarán al usuario a asumir todo el coste.

La política del agua y su PHN son paradigma del abismo que en materias medioambientales hay entre dichos y hechos. Por ello, y pese a Johannesburgo, hay pocas esperanzas de que la tendencia se invierta. Deberemos esperar una crisis que ponga aún más en evidencia la insostenible situación actual. Con todo, soñar es gratis. Lo ideal sería que políticos y séquitos hayan vuelto de la Cumbre, medioambientalmente hablando, reciclados y que al fin, cumpliendo lo que dicen, propiciaran la transición capaz de evitar los sobresaltos e incertidumbres de toda crisis.